



Nicolás de Pedro
Investigador principal, CIDOB

Un desafío al orden de seguridad europeo

Moscú muestra una clara vocación de rivalizar estratégicamente con la Unión Europea y representa un doble desafío para Bruselas: por un lado, erosionando la frágil unidad europea bajo liderazgo alemán en torno a las sanciones y a la necesidad de firmeza frente a la injerencia rusa en Ucrania; por el otro, trazando alianzas y cooperando con fuerzas políticas europeas con una clara agenda anti-UE (Frente Nacional, Jobbik, UKIP, etc.) con el objetivo claro de debilitar a la Unión. La crisis de Ucrania y las tensiones con Rusia, incluyendo su dimensión militar, resultan particularmente difíciles de abordar para una UE en la que una política exterior y de seguridad común sigue siendo inexistente; es decir, las dos áreas –Exteriores y Defensa– en las que Bruselas muestra mayores debilidades y disfuncionalidades. Además, este desafío se produce en un momento de profunda crisis de la UE, lo que entraña mayores riesgos y contribuye al cuestionamiento del propio proceso de integración europea. Ucrania es un asunto de la máxima relevancia, no solo por su valor simbólico. Lo que se pone en duda es el orden de seguridad europeo que Rusia ha dinamitado con la anexión de Crimea y el cuestionamiento de las fronteras y de la plena soberanía del resto de repúblicas exsoviéticas.

Una respuesta basada en las sanciones

La UE, en línea con Estados Unidos, ha aprobado tres paquetes de sanciones contra Rusia como respuesta a la anexión de Crimea y su intervención militar en Ucrania. Rusia, por su parte, ha impuesto un veto a las importaciones de alimentos procedentes de la UE que está resultando particularmente lesivo para Alemania y los países del sur de Europa. Este impacto, no obstante, no es comparable con el que han producido en la economía rusa las sanciones europeas, unidas al desplome de los precios del petróleo, principal fuente de ingresos de la Federación Rusa. La UE, encabezada por Alemania y Francia, respalda activamente el protocolo suscrito en Minsk en febrero de 2015 que establece una precaria e incierta hoja de ruta para la pacificación de Ucrania. La incertidumbre se deriva, fundamentalmente, de la diferente interpretación de cada una

de las partes (Ucrania, por un lado, y Rusia y la insurgencia que patrocina, por el otro) de los aspectos políticos del documento («proceso de descentralización» y «diálogo nacional inclusivo») y del derecho de veto que se otorga *de facto* a Moscú sobre el proceso de reforma constitucional ucraniano.

El desafío de la unidad europea

La unidad de la UE volverá a ponerse a prueba en junio cuando los líderes europeos tengan que formalizar el acuerdo alcanzado en marzo de 2015 en el que se vincula la vigencia de las sanciones económicas europeas a la «implementación completa de los acuerdos de Minsk». Esto supone su extensión, al menos, hasta el final de 2015. El acuerdo fue impulsado por el presidente del Consejo Europeo Donald Tusk, la canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés François Hollande. Estados miembros como Grecia, Hungría o Chipre han manifestado, más o menos explícitamente, su rechazo a su mantenimiento; mientras que Alemania ya ha dejado clara su posición firme en este tema, compartida con los países bálticos, Polonia o el Reino Unido. Otros como España, Italia o Francia muestran una posición comprometida con la unidad europea, pero más ambigua y marcada, sobre todo, por la primacía otorgada a los intereses económicos en juego. El problema es que estas fisuras no afectan exclusivamente a asuntos económicos, sino, como se ha indicado, a los principios del orden de seguridad en el espacio continental europeo. Por todo ello, es imprescindible un debate riguroso y profundo en el seno de la UE sobre su relación con Rusia. De lo contrario, la indefinición y ambigüedades seguirán debilitando la posición de Bruselas frente al gigante ruso.